

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

INE/CG689/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020
DENUNCIANTE: LILIANA PATRICIA MARTÍNEZ
DIONICIO Y OTRAS PERSONAS
DENUNCIADO: PARTIDO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LILIANA PATRICIA MARTÍNEZ DIONICIO Y OTROS, A TRAVÉS DE LAS CUALES HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE ESTA AUTORIDAD, HECHOS PRESUNTAMENTE CONTRAVENTORES DE LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN SU PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIÓN AL PARTIDO DEL TRABAJO, USANDO PARA TAL EFECTO, SIN CONSENTIMIENTO, SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 19 de octubre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O

<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.
<i>Comisión</i>	La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>Instituto o INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>Ley de Medios</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Ley de Partidos	Ley General de Partidos Políticos
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
PT o denunciado	Partido del Trabajo
quejosos o denunciantes	Liliana Patricia Martínez Dionicio, Juan José Corpus García, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba, Gabriela Lavalle Azamar, Benito de Jesús Rivera Espíndola, Karina Olmos Sánchez, Jonás David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, Yolanda Piñón Valencia, Daniela Rodríguez Gómez, Valeria Natali Almaguer Castillo, María Feliz Vanegas Bueno, Sureyma Concepción Velasco Trujillo, Adelfa Lorenzo Agustín y Heriberto Arrieta Álvarez.
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Unidad Técnica o UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE

R E S U L T A N D O

I. ACUERDO INE/CG33/2019¹. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General*, aprobó el acuerdo **INE/CG33/2019**, por el cual se determinó la implementación, de manera excepcional, de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos.

En este sentido, en el punto de acuerdo TERCERO del citado acuerdo, se determinó lo siguiente:

¹ Consultable en <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/> CG1ex201901-23-ap-14.pdf

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

[Énfasis añadido]

Asimismo, se precisó que los procedimientos sancionadores ordinarios cuya suspensión pudiera generar la caducidad de la potestad sancionadora por parte de esta autoridad, en términos de la jurisprudencia 9/2018, emitida por la Sala Superior, o sobre los cuales recayera una orden expresa de resolución por parte del mencionado órgano jurisdiccional, continuarían con la instrucción ordinaria.

II. INFORME SOBRE EL ACUERDO INE/CG33/2019. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, presentó al Consejo General el Informe Final sobre el procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales (**INE/CG33/2019²**), mediante el cual, hizo del conocimiento que los siete partidos políticos, entre ellos el *PT*, durante la vigencia del citado Acuerdo, presentaron los informes respectivos sobre el avance en el agotamiento de las etapas previstas en el acuerdo **INE/CG33/2019**.

III. DESIGNACIÓN DE NUEVAS CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES. El veintidós de julio del dos mil veinte, la Cámara de Diputados designó por mayoría de votos a los Consejeros Electorales Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña, Dr. Uuc- Kib Espadas Ancona, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora y Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan.

² Consultable en la página de internet del INE, o bien en la dirección electrónica: <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/113621>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

IV. INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES. El treinta de julio de dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General, fue aprobado el Acuerdo **INE/CG172/2020** denominado **ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN Y PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES PERMANENTES, TEMPORALES Y OTROS ÓRGANOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL** en el que, entre otras cuestiones, se determinó la integración y presidencia de la *Comisión*.

V. DENUNCIAS. Mediante oficios signados por los Vocales Ejecutivos y Secretarios de diversos órganos subdelegacionales del *INE*, se remitieron a la *UTCE* las quejas interpuestas por las personas denunciantes en contra del *PT*, por presuntamente haber sido indebidamente afiliadas a dicho partido político, haciendo para tal efecto, el uso no autorizado de sus datos personales, tal como se advierte en el cuadro siguiente:

No.	Nombre	Entidad
1	Liliana Patricia Martínez Dionicio ³	México
2	Juan José Corpus García ⁴	Nuevo León
3	Manuel Antonio Cortes Velázquez ⁵	Quintana Roo
4	Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba ⁶	Zacatecas
5	Gabriela Lavalle Azamar ⁷	Oaxaca
6	Benito de Jesús Rivera Espíndola ⁸	San Luis Potosí
7	Karina Olmos Sánchez ⁹	Ciudad de México
8	Jonás David Alcalá Franco ¹⁰	Sonora
9	David Isabel Hernández Ortiz ¹¹	México
10	Tonantzin Astudillo Méndez ¹²	Guerrero
11	Yolanda Piñón Valencia ¹³	México
12	Daniela Rodríguez Gómez ¹⁴	Puebla

³ Visible a fojas 3 a 10 del expediente.

⁴ Visible a fojas 13 a 17 del expediente.

⁵ Visible a fojas 21 a 25 del expediente.

⁶ Visible a fojas 29 a 34 del expediente.

⁷ Visible a fojas 37 a 40 del expediente.

⁸ Visible a fojas 43 a 46 del expediente.

⁹ Visible a fojas 50 a 53 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 56 a 61 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 64 a 71 del expediente.

¹² Visible a fojas 74 a 79 del expediente.

¹³ Visible a fojas 82 a 85 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 88 a 92 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

No.	Nombre	Entidad
13	Valeria Natali Almaguer Castillo ¹⁵	Nuevo León
14	María Felix Vanegas Bueno ¹⁶	Guerrero
15	Sureyma Concepción Velasco Trujillo ¹⁷	Oaxaca
16	Adelfa Lorenzo Agustín ¹⁸	Guerrero
17	Heriberto Arrieta Álvarez ¹⁹	

VI. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN; PREVENCIÓN A BENITO DE JESÚS RIVERA ESPÍNDOLA Y BAJA DE LOS QUEJOSOS DEL PADRON DE MILITANTES DEL PT. Mediante acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil veinte²⁰ la *UTCE* determinó, entre otras cuestiones, registrar las quejas mencionadas bajo el número de expediente citado al rubro; admitirlas a trámite, con excepción de la presentada por Benito de Jesús Rivera Espíndola y reservar el emplazamiento hasta contar con elementos para determinar lo conducente.

Asimismo, se requirió al *PT* y a la *DEPPP*, a efecto de que señalaran si las personas quejasas fueron afiliadas al denunciado, la fecha de afiliación respectiva y, en el caso del *PT*, las cédulas de afiliación correspondientes. Del mismo modo, se ordenó la baja de los denunciantes del padrón de militantes del citado denunciado.

Dicho proveído fue notificado personalmente a Benito de Jesús Rivera Espíndola el nueve de diciembre de dos mil veinte²¹, sin que hubiera la prevención formulada, ²² de acuerdo a lo informado por el Vocal Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de San Luis Potosí

VII. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO AL PT. Mediante oficios REP-PT-INE-PVG-213/2020²³, REP-PT-INE-PVG-215/2020²⁴, REP-PT-INE-

¹⁵ Visible a fojas 95 a 100 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 104 a 112 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 116 a 121 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 124 a 129 del expediente.

¹⁹ Visible a fojas 130 a 135 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 136 a 147 del expediente

²¹ Visible a fojas 229 a 231 del expediente

²² Visible a foja 331 del expediente

²³ Visible a fojas 170 a 200 del expediente.

²⁴ Visible a fojas 201 a 205 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

PVG-216/2020²⁵ y REP-PT-INE-PVG-005/2021²⁶ de once y catorce de diciembre de dos mil veinte, así como de ocho de enero de dos mil veintiuno, respetivamente, el denunciado dio cumplimiento al requerimiento de información formulado por la *UTCE*, precisando que las personas quejasas si fueron sus afiliados y que, en cumplimiento al acuerdo **INE/CG33/2019** y a lo ordenado por la Unidad Técnica, los dio de baja de su padrón de militantes.

Asimismo, agregó en original las cédulas de afiliación de Juan José Corpus García, Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia, Valeria Natali Almaguer Castillo y en copia simple las de Gabriela Lavalle Azamar, Daniela Rodríguez Gómez, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Adelfa Lorenzo Agustín.

VIII. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA DEPPP.

Mediante correo electrónico institucional de quince de diciembre de dos mil veinte,²⁷ el Titular de la *DEPPP*, informó que las personas quejasas sí fueron afiliadas al *PT*, en distintas fechas; sin embargo, en la actualidad se encuentran dadas de baja del padrón de militantes respectivo, **entre el ocho y el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.**

IX. QUEJA POR NO INTERPUESTA, EMPLAZAMIENTO, VISTA E INSPECCIÓN AL SITIO WEB DEL PT. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno²⁸, la Unidad Técnica hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos al incumplir la carga procesal impuesta a **Benito de Jesús Rivera Espíndola**, esto es, **se tuvo por no interpuesta su queja.**

Asimismo, ordenó emplazar al *PT*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas que considerara pertinentes, corriéndosele traslado con copia simple de las constancias que, hasta esa etapa procesal, integraban el presente expediente.

²⁵ Visible a fojas 206 a 209 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 284 a 295 del expediente.

²⁷ Visible a fojas 220 a 222 del expediente.

²⁸ Visible a fojas 337 a 351 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En dicho acuerdo también se dio vista a Juan José Corpus García²⁹, Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba³⁰, Gabriela Lavallo Azamar³¹, Yolanda Piñón Valencia³², Daniela Rodríguez Gómez³³, Valeria Natali Almaguer Castillo³⁴, Sureyma Concepción Velasco Trujillo³⁵ y Adelfa Lorenzo Agustín³⁶ con la documentación aportada por el denunciado, a efecto de que realizara las manifestaciones pertinentes.

Al respecto, cabe señalar que ninguno de los quejosos realizó manifestaciones en torno a la vista ordenada,³⁷ con excepción de Valeria Natali Almaguer Castillo³⁸.

Del mismo modo, con el propósito de constatar que las personas quejosas ya no se encontraban como afiliadas del denunciado, se ordenó inspeccionar el sitio web del *PT*, por lo que mediante acta circunstanciada de veintiocho de septiembre del mismo año³⁹ se constató que los que efectivamente las personas quejosas fueron dadas de baja como afiliadas de las plataformas públicas del *PT*.

Dicho proveído se notificó de la siguiente manera:

Fecha de notificación	Contestación	Síntesis de la respuesta del denunciado
Citatorio. 06/04/2021 ⁴⁰	REP-PT-INE-PVG-184/2021 ⁴²	Que los quejosos se afiliaron libre y voluntariamente por lo cual no existe infracción alguna a la normatividad electoral.
Cédula.		Que las cédulas de afiliación aportadas deben tener eficacia demostrativa para justificar las afiliaciones

²⁹ Visible a fojas 374 a 376 del expediente.

³⁰ Visible a fojas 445 a 447 del expediente.

³¹ Visible a fojas 450 a 455 del expediente.

³² Visible a fojas 415 a 418 del expediente.

³³ Visible a fojas 433 a 437 del expediente.

³⁴ Visible a fojas 378 a 384 del expediente.

³⁵ Visible a fojas 365 a 368 del expediente.

³⁶ Visible a fojas 442 a 443 del expediente.

³⁷ Visible a fojas 465 a 469 del expediente.

³⁸ Visible a foja 400 del expediente.

³⁹ Visible a fojas 457 a 464 del expediente

⁴⁰ Visible a foja 359 del expediente.

⁴² Visible a fojas 405 a 413 del expediente.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Fecha de notificación	Contestación	Síntesis de la respuesta del denunciado
07/04/2021 ⁴¹		<p>de los quejosos, ya que estos no objetaron su contenido y alcance probatorio.</p> <p>No obstante, en términos del acuerdo INE/CG33/2019, para garantizar el derecho de libre afiliación de los quejosos, se atendió puntualmente su solicitud de baja, cancelándolos del padrón de militantes respectivo.</p> <p>Al respecto ofreció como medios de prueba las documentales privadas consistentes en las cédulas de afiliación (4 en original y 4 en copia simple) de ocho quejosos; instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana.</p>

X. ACUERDO DE ALEGATOS. Mediante proveído de veintiocho de marzo del dos mil veintidós⁴³ para garantizar el principio de contradicción de las partes, la *UTCE* puso los autos a la vista de las partes para que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera. Dicho acuerdo se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
<i>PT</i>	<p>01/04/2022⁴⁴</p> <p>Se entendió con personal de la representación y se notificó por estrados.</p>	Del 04 al 08 de abril de 2022 ⁴⁵	<p>Oficio REP-PT-INE-SGU-167/2022⁴⁶ de 08 de abril de 2022.</p> <p>Reprodujo lo manifestado en la contestación al emplazamiento.</p>

⁴¹ Visible a fojas 360 a 363 del expediente.

⁴³ Visible a fojas 474 a 480 del expediente

⁴⁴ Visible a fojas 484 a 489 del expediente

⁴⁵ Sin contar sábado 2 y domingo 3 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁴⁶ Visible a fojas 490 a 504 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
			Además, señaló que se debe tener por precluido el derecho de los quejosos que no desahogaron la vista respecto de la cédula de afiliación aportada. La objeción de Valeria Natali Almaguer Castillo debe desestimarse porque no aporta prueba alguna respecto de la veracidad de su contenido.
Liliana Patricia Martínez Dionicio	18/04/2022 ⁴⁷ La diligencia se entendió con la quejosa	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁴⁸	No contestó
Juan José Corpus García	18/04/2022 ⁴⁹ La diligencia se entendió con el quejoso	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁵⁰	No contestó
Manuel Antonio Cortes Velázquez	15/04/2022 ⁵¹ Se notificó por estrados porque no se encontró al quejoso en su domicilio.	Del 18 al 22 de abril de 2022 ⁵²	No contestó
Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba	19/04/2022 ⁵³ La diligencia se entendió con la quejosa	Del 20 al 26 de abril de 2022 ⁵⁴	No contestó

⁴⁷ Visible a foja 556 a 558 del expediente

⁴⁸ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁴⁹ Visible a foja 583 a 584 del expediente

⁵⁰ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁵¹ Visible a foja 506 a 516 del expediente

⁵² Sin contar sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁵³ Visible a foja 536 a 537 del expediente

⁵⁴ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
Gabriela Lavalle Azamar	18/04/2022 ⁵⁵ La diligencia se entendió con el autorizado	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁵⁶	No contestó
Karina Olmos Sánchez	18/04/2022 ⁵⁷ La diligencia se entendió con la autorizada	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁵⁸	No contestó
Jonás David Alcalá Franco	19/04/2022 ⁵⁹ Se notificó por estrados porque fue el domicilio que señaló el quejoso	Del 20 al 26 de abril de 2022 ⁶⁰	No contestó
David Isabel Hernández Ortiz	18/04/2022 ⁶¹ La diligencia se entendió con el quejoso	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁶²	No contestó
Tonantzin Astudillo Méndez	14/04/2022 ⁶³ La diligencia se entendió con la autorizada	Del 15 al 21 de abril de 2022 ⁶⁴	No contestó
Yolanda Piñón Valencia	18/04/2022 ⁶⁵ La diligencia se entendió con la quejosa	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁶⁶	No contestó
Daniela Rodríguez Gómez	22/04/2022 ⁶⁷ La diligencia se entendió con la autorizada	Del 25 al 29 de abril de 2022 ⁶⁸	No contestó

⁵⁵ Visible a foja 539 a 544 del expediente

⁵⁶ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁵⁷ Visible a foja 518 a 520 del expediente

⁵⁸ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁵⁹ Visible a foja 594 del expediente

⁶⁰ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁶¹ Visible a foja 552 a 554 del expediente

⁶² Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁶³ Visible a foja 522 a 525 del expediente

⁶⁴ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁶⁵ Visible a foja 547 a 550 del expediente

⁶⁶ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁶⁷ Visible a foja 561 a 565 del expediente

⁶⁸ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Sujeto notificado	Fecha de notificación	Plazo para formular alegatos	Fecha de contestación y alegatos
Valeria Natali Almaguer Castillo	18/04/2022 ⁶⁹ La diligencia se entendió con la quejosa	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁷⁰	No contestó
María Felix Vanegas Bueno	18/04/2022 ⁷¹ La diligencia se entendió con la quejosa	Del 19 al 25 de abril de 2022 ⁷²	No contestó
Sureyma Concepción Velasco Trujillo	15/04/2022 ⁷³ La diligencia se entendió con la quejosa	Del 18 al 22 de abril de 2022 ⁷⁴	No contestó
Adelfa Lorenzo Agustín	15/04/2022 ⁷⁵ La diligencia se entendió con la autorizada	Del 18 al 22 de abril de 2022 ⁷⁶	No contestó
Heriberto Arrieta Álvarez	15/04/2022 ⁷⁷ Ninguna persona atendió la diligencia Se notificó por estrados	Del 18 al 22 de abril de 2022 ⁷⁸	No contestó

XI. VERIFICACIÓN DE ESTATUS REGISTRAL. El cuatro de octubre de dos mil veintidós, la *Unidad Técnica* realizó una verificación al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos y corroboró que las personas quejasas fueron dadas de baja del padrón de militantes del *PT*, sin que hubiesen sido reincorporadas al mismo.

XII. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución

⁶⁹ Visible a foja 598 a 609 del expediente

⁷⁰ Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁷¹ Visible a foja 578 a 580 del expediente

⁷² Sin contar sábado 23 y domingo 24 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁷³ Visible a foja 570 a 574 del expediente

⁷⁴ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁷⁵ Visible a foja 526 a 528 del expediente

⁷⁶ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022, por ser inhábiles.

⁷⁷ Visible a foja 530 a 533 del expediente

⁷⁸ Sin contar sábado 16 y domingo 17 de abril de 2022, por ser inhábiles.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

correspondiente, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión*.

XIII. SESIÓN DE LA COMISIÓN. En la Cuarta Sesión Ordinaria de carácter privado, celebrada doce de octubre de dos mil veintidós, la *Comisión*, aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad de votos de sus integrantes y ordenó turnarlo a este Consejo General para su aprobación definitiva, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador, consiste en la presunta transgresión a los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*, los cuales se encuentran replicados en los numerales 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b); 3, párrafo 2; 25, párrafo 1, incisos a), e) y u), y 29 de la *Ley de Partidos*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación de las personas quejasas, utilizando para ello indebidamente sus datos personales, por parte del *PT*.

Al respecto, es importante tomar en consideración que, conforme al artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, correspondiendo al *INE* vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del *COFIPE*; 442, párrafo 1, inciso a); y 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento jurídico, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo que antecede, infracciones que son sancionables por el *Consejo General*.

En consecuencia, toda vez que corresponde a este órgano superior de dirección conocer de las infracciones a la normatividad electoral y, en su caso, imponer las sanciones atinentes, en el particular, esta autoridad resulta competente para conocer y resolver respecto de la infracción denunciada, atribuida al *PT*, consistente, esencialmente, en la presunta violación al derecho de libertad de afiliación y utilización indebida de datos personales de las personas quejasas.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente *SUP-RAP-107/2017*, en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de militantes.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE*, —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366 del *COFIPE*—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la Constitución, es decir con base en el derecho humano a la libertad de afiliación en materia política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que las presuntas faltas (indebida afiliación y uso indebido de datos personales) atribuidas al *PT*, se cometieron en diversas fechas, en las cuales tuvieron vigencia diversos ordenamientos jurídicos, sin perder de vista que todos ellos contienen exactamente las mismas reglas respecto al derecho a la libertad de afiliación a los partidos políticos, como se desarrollará con amplitud más adelante en este mismo instrumento resolutivo.

En efecto, conforme a lo anotado en el apartado de antecedentes de la presente resolución, la Unidad Técnica realizó diversas diligencias a fin de esclarecer la fecha de afiliación de las personas quejosas al *PT*, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

No	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación <i>DEPPP</i> ⁷⁹	Fecha de afiliación <i>PT</i> ⁸⁰
1	Liliana Patricia Martínez Dionicio	05/03/2020	05/03/2020
2	Juan José Corpus García	17/02/2015	17/02/2015
3	Manuel Antonio Cortes Velázquez	17/01/2020	17/01/2020
4	Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba	20/12/2019	20/12/2019
5	Gabriela Lavalle Azamar	22/12/2016	22/12/2016
6	Benito de Jesús Rivera Espíndola	27/03/2017	27/03/2017

⁷⁹ Visible a fojas 220 a 222 del expediente

⁸⁰ Visible a foja 37 del expediente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

No	Nombre del quejoso	Fecha de afiliación <i>DEPPP</i> ⁷⁹	Fecha de afiliación <i>PT</i> ⁸⁰
7	Karina Olmos Sánchez	15/03/2012	15/03/2012
8	Jonás David Alcalá Franco	29/11/2019	29/11/2019
9	David Isabel Hernández Ortiz	05/12/2019	05/12/2019
10	Tonantzin Astudillo Méndez	29/11/2019	29/11/2019
11	Yolanda Piñón Valencia	24/09/2019	24/09/2019
12	Daniela Rodríguez Gómez	29/11/2019	29/11/2019
13	Valeria Natali Almaguer Castillo	25/03/2014	25/03/2014
14	María Félix Vanegas Bueno	14/12/2011	14/11/2011
15	Sureyma Concepción Velasco Trujillo	05/04/2017	05/04/2017
16	Adelfa Lorenzo Agustín	01/12/2019	01/12/2019
17	Heriberto Arrieta Álvarez	02/04/2008	02/04/2008

Del análisis de las quejas que motivaron el procedimiento que nos ocupa, se advierte que en los casos de Karina Olmos Sánchez, Valeria Natali Almaguer Castillo, María Félix Vanegas Bueno y Heriberto Arrieta Álvarez, según lo informado por la Dirección de Prerrogativas y Políticos y el denunciado, las posibles afiliaciones indebidas fueron realizadas **antes de la entrada en vigor de la LGIPE**, es decir, antes del veintitrés de mayo de dos mil catorce; por tanto, la conducta atribuida al partido político debe ser analizada bajo la luz de las normas jurídicas vigentes al momento en que sucedieron los hechos presuntamente infractores; esto es, la legislación comicial sustantiva aplicable será el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Por cuanto hace a las quejas restantes, dado que las presuntas indebidas afiliaciones acontecieron de manera posterior a la entrada en vigor de la LGIPE, resulta claro que los hechos cuestionados deben ser valorados no sólo a la luz de este ordenamiento jurídico, sino también de la *Ley de Partidos*, ya que los hechos motivo de queja se suscitaron bajo la vigencia de dichos ordenamientos jurídicos.

Ahora bien, respecto a las reglas procedimentales que regirán la sustanciación del presente procedimiento, serán las contenidas en la LGIPE, al no contener disposición alguna en perjuicio de las partes.

Lo anterior, tomando en consideración la interpretación sistemática, funcional y armónica de los artículos Tercero y Sexto Transitorios del Decreto por el que se expide la LGIPE, en consonancia con la Jurisprudencia de rubro **RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES**⁸¹.

TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO INE/CG33/2019

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- a. La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política **fue insuficiente para inhibir esta conducta.**
- b. **Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación**, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- c. La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar **su número mínimo** de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que **no existiese doble afiliación**, a partidos políticos con registro o en formación.

⁸¹ Véase <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1012/1012265.pdf>

- d. Dicha verificación **no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación** de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación de las personas a los partidos políticos, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontrasen en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido Acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados y afiliadas, son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en su archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.
4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este Consejo General pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

Como se ha señalado con antelación, las personas quejas alegaron la violación a su derecho de afiliación libre y voluntaria para tomar parte en los asuntos públicos

de país, así como el uso no autorizado de sus datos personales, en esencia, porque supuestamente fueron inscritas sin su consentimiento al padrón de militantes del *PT*.

1. Excepciones y defensas

Por su parte, el *PT* en sus distintas intervenciones procesales, medularmente, señaló en su defensa lo siguiente:

- Que los quejosos se afiliaron libre y voluntariamente por lo cual no existe infracción alguna a la normatividad electoral.
- Que las personas denunciantes fueron dadas de baja de su padrón de afiliados, por lo que actualmente ya no son militantes del *PT*, dando cumplimiento con ello al Acuerdo INE/CG33/2019.
- Que las cédulas de afiliación aportadas deben tener eficacia demostrativa para justificar las afiliaciones de las personas quejosas, ya que estas no objetaron su contenido y alcance probatorio.
- La objeción de Valeria Natali Almaguer Castillo debe desestimarse porque no aporta prueba alguna respecto de la veracidad de su contenido.

Como se puede apreciar, los argumentos vertidos por el partido político en defensa de sus intereses, tanto al momento de contestar el emplazamiento, como en la rendición de alegatos, tienen que ver con el fondo de la controversia y no con cuestiones de procedencia de la vía, competencia de esta autoridad electoral nacional, o con la personalidad de los quejosos, por lo que sus argumentos serán analizados al realizar el estudio del caso concreto.

2. Materia del procedimiento

Con base en las posturas expresadas por las partes, la materia del procedimiento en el presente asunto estriba en determinar si el *PT* conculcó el derecho a la libre afiliación en materia política que corresponde a las personas quejosas, quienes

alegaron no haber consentido estar en sus filas, vulnerando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 341, párrafo 1, inciso a), y 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354 párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*; 442, párrafo 1, inciso a); 443, párrafo 1, incisos a); 456, párrafo 1, inciso a); de la *LGIPE*; y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e), y u), de la *Ley de Partidos*.

3. Marco normativo

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

A) Constitución, tratados internacionales y ley

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6°

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

*II. La información que se refiere a la vida privada y **los datos personales será protegida** en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. *Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;*

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En esta medida, se considera que el derecho de asociación en materia político-electoral, como lo ha sostenido la *Sala Superior*, es un **derecho fundamental** consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, el cual propicia el pluralismo político, así como la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático, en el entendido de que sin su existencia, o de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, se puede concluir que el derecho de asociación en materia político-electoral, es la base de la formación de los partidos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos, así como afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y VI; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

Ahora bien, el ejercicio de la libertad de asociación en materia política, prevista en el artículo 9 de la *Constitución*, está sujeto a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea, por un lado, pacífico; y por otro, que tenga un objeto lícito, mientras que la última, circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos y agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002**, emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**⁸².

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente⁸³, tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de

⁸² Consultable en la página:
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁸³ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

En el ámbito internacional, el derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes (de asociarse) para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

En el espacio nacional, no obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y ocho años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

***II.** Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

***1.** Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:*

***a.** En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que **suscriben el documento como manifestación formal de afiliación,** y*

***b.** El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y **firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.**”*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, **suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó de manera expresa lo siguiente:

- Que es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y **libremente**, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la **afiliación** individual, **libre** y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

- Que era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, **cumplir sus normas de afiliación**, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, **cuando incumplieran con sus obligaciones**, señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hizo más tarde el COFIPE de quince de enero de dos mil ocho y actualmente la *LGIFE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del otrora Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprobaron los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (CG617/2012)*.

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los Partidos Políticos Nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación, la *DEPPP* deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al total preliminar de afiliados, para obtener el número total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los mencionados Lineamientos, consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional contaban o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los afiliados necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PT

A efecto de tener mayor claridad acerca del proceso que un ciudadano debe llevar a cabo para convertirse en militante del denunciado, resulta necesario analizar la norma interna del partido político, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de los Estatutos del PT:

CAPÍTULO IV. DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES. DE LOS MILITANTES.

Artículo 14. Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. **Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria,** además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el Artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO.

Artículo 22. **Los requisitos de ingreso de los afiliados** al Partido del Trabajo son:

(...)

d) **Presentar una solicitud de afiliación por escrito,** a la instancia partidaria correspondiente.

e) **Presentar una solicitud de ingreso de manera individual, personal, libre, pacífica y voluntaria** ante la Comisión Ejecutiva Municipal, Delegacional, Estatal, del Distrito Federal y Nacional en su caso.

f) Cubiertos los requisitos, el Partido del Trabajo podrá aceptar la solicitud de ingreso y emitir la constancia de afiliación.

g) *En caso de que la constancia de ingreso respectiva de afiliados, simpatizantes y militantes no sea emitida por la instancia correspondiente, en un plazo de 30 días, ésta se dará por aceptada. Los afiliados podrán ser promovidos a militantes.*

D) Normativa emitida por este Consejo General

Ahora bien, resulta importante resaltar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos, asumió el órgano máximo de dirección del INE, por medio del acuerdo **INE/CG33/2019**, relativo a “*la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales*” derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el presente procedimiento.

CONSIDERANDO

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN⁸⁴, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

⁸⁴ Partidos Políticos Nacionales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.**

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político-electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

ACUERDO

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer...”

Conclusiones

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las normas transcritas, se pueden obtener las conclusiones siguientes:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean o no formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es la o el ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político.
- Las y los militantes tienen el derecho de refrendar o renunciar a su militancia.
- La información que sea requerida en términos distintos a los señalados será atendida de acuerdo con las disposiciones del Partido en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Las ciudadanas y ciudadanos de la república tienen el derecho elegir libremente si desean permanecer como afiliados de un determinado partido político o ser dados de baja del mismo, si expresan su voluntad en ese sentido.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto de la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avalen las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este Consejo General, emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

4. Carga y estándar probatorio sobre indebida afiliación a un partido político

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando un ciudadano pretenda, libre y voluntariamente, ser registrado como militante del *PT*, por regla general **debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrado en el padrón respectivo.**

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PT*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Lo mismo ocurre con aquellos documentos por medio de los cuales, acrediten haber dado trámite a las solicitudes de desafiliación correspondientes; pues son indispensables para sus procesos de depuración de los padrones de militantes.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *Ley de Partidos*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están obligados a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, cualquiera que haya sido su objeto, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran expresaron una decisión individual y libre.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación radicado con la clave de expediente **SUP-RAP-107/2017**⁸⁵, donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia 21/2013, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁸⁶ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su

⁸⁵ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁸⁶ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁸⁷ y como estándar probatorio,⁸⁸ como se ilustra en los párrafos subsecuentes.

En el primer aspecto —*regla probatoria*— implica destacadamente **quién debe aportar los medios de prueba** en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —*estándar probatorio*— es un criterio para concluir **cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho**, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁸⁹, ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia **cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

⁸⁷ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁸⁸ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁸⁹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación de algún ciudadano versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado su consentimiento, se deben satisfacer dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “*el que afirma está obligado a probar*” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, conforme al artículo 441 de la *LGPE*, resulta aplicable supletoriamente el artículo 15, párrafo 2, de la *Ley de Medios*, lo que implica, que la denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliada al partido denunciado.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión de que un ciudadano desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las denuncias que dieron lugar al presente procedimiento sancionador, las personas quejas alegan que **no dieron su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostienen también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que los denunciantes no están obligados a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, **no son objeto de demostración los hechos negativos**, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, **la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones** y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la *Sala Superior* sostuvo que si el partido denunciado **alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes**, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, **la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar** las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación, a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la **presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna**, sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

De tal suerte que si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Bajo el contexto expuesto, resulta conveniente apuntar que el denunciado ofreció medios de prueba consistentes en **cuatro cédulas de afiliación en original correspondientes** a Juan José Corpus García, Yahaira Guadalupe De Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia y Valeria Natali Almaguer Castillo y **cuatro cédulas de afiliación en copia simple** correspondiente a Gabriela Lavallo Azamar, Daniela Rodríguez Gómez, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Adelfa Lorenzo Agustín, mientras que respecto a las personas quejosas restantes, fue omiso a pesar de las distintas oportunidades procesales que tuvo para aportar medios de prueba que demostraran su tesis defensiva, asumiendo así las consecuencias de esa falta de prueba.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por el quejoso, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la *Unidad Técnica* durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes **podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores ordinario y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.***
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes **podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio debiendo indicar cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.***
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que **es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

Énfasis añadido

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, para destruir la eficacia probatoria de los elementos de prueba aportados por su contraparte, el quejoso o bien el denunciado **deberán señalar con precisión los aspectos de la prueba que, a su parecer, constituyen defectos o deficiencias que le restan credibilidad; además, no basta con formular dicha objeción formal, para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario aportar, en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar los extremos de su objeción.**

Al respecto, resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 4/2005⁹⁰ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

⁹⁰ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998).

En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.

Énfasis añadido

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- *DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.*⁹¹
- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.*⁹²
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.*⁹³
- *DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)*⁹⁴
- *DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS*⁹⁵
- *DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)*⁹⁶

⁹¹ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, agosto de 1996, Página 423.

⁹² Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, septiembre de 2009, Página 3128.

⁹³ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, marzo de 1993, Página 46.

⁹⁴ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, agosto de 1993, Página 422.

⁹⁵ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Página 1254.

⁹⁶ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, Página 1454.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.3o.C. J/11⁹⁷, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

Énfasis añadido

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia III.1o.C. J/29⁹⁸, sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado***

⁹⁷ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Página 615.

⁹⁸ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Página 680.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.

Énfasis añadido

En suma, para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado **cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad del quejoso**, como acontece en la especie, **no basta que, de manera abstracta y genérica, el quejoso afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos**, como ocurre en el caso de **Valeria Natali Almaguer Castillo**.

Desde esta óptica, resulta claro que la objeción a la cédula de afiliación respectiva formulada por Valeria Natali Almaguer Castillo, debe desestimarse porque no se ajusta a lo establecido en el artículo 24 de la LGIPE, ya que no existe base para determinar la ineficacia del medio de la citada cédula de afiliación.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

5. Pruebas y acreditación de los hechos

A) Pruebas recabadas por la UTCE

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

1. **Correo electrónico** remitido desde la cuenta patricio.ballados@ine.mx, correspondiente al Director Ejecutivo de Partidos Políticos y Financiamiento de la *DEPPP*, enviado a la Unidad Técnica el quince de diciembre de dos mil veinte, a través del cual informó el estatus de las personas quejasas como afiliadas del *PT*, la fecha en que fueron integradas al padrón de militantes y aquella en que fueron dadas de baja.
2. **Acta circunstanciada de inspección** a la página electrónica del *PT*, practicada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se constató que actualmente las personas quejasas no se encuentran como militantes del denunciado en sus plataformas públicas.

B) Pruebas aportadas por el *PT*

3. **Documentales privadas**, consistentes en los oficios REP-PT-INE-PVG-213/2020, REP-PT-INE-PVG-215/2020, REP-PT-INE-PVG-216/2020 y REP-PT-INE-PVG-005/2021, de once y catorce de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respetivamente, a través del cual reconoció haber afiliado a las personas quejasas e informó la baja de su padrón de militantes, afirmado haber dado cumplimiento al Acuerdo INE/CG33/2019.
4. **Documentales privadas** consistentes en el **original de las cédulas de afiliación** de Juan José Corpus García, Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia y Valeria Natali Almaguer Castillo, mediante la cual pretende demostrar su licitud.
5. **Documentales privadas** consistentes en **copias simples de las cédulas de afiliación** de Gabriela Lavallo Azamar, Daniela Rodríguez Gómez, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Adelfa Lorenzo Agustín, mediante la cual pretende demostrar su licitud.

C) Valoración de los medios de prueba

De los medios de prueba referidos con anterioridad, los listados en los numerales 1 y 2, del inciso A), son pruebas documentales públicas con valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la *LGIPE*; y 22, párrafo 1, fracción I, incisos a) y b); y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; no encontrarse objetadas en cuanto a su autenticidad y contenido conforme a las reglas previstas en el artículo 24 del reglamento antes citado; ni estar desvirtuadas por algún elemento agregado a los autos.

Por otro lado, las pruebas identificadas con los numerales 3, 4 y 5, inciso B), en tanto documentales privadas, únicamente harán prueba plena en cuanto a los hechos a los que se refiere cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, con fundamento en lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), y 462, párrafos 1 y 3, de la *LGIPE*; 22, párrafo 1, fracción II; y 27, párrafo 3, del *Reglamento de Quejas*.

En este sentido, del análisis al contenido de los medios de prueba antes citados, de su relación con los hechos afirmados por las partes y la verdad conocida, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:

D) Conclusiones

1. Aun cuando las personas quejasas del presente procedimiento actualmente ya no forman parte del padrón de militantes del *PT*, **sí fueron afiliadas** al mismo, en las fechas señaladas por la *DEPPP* y reconocidas por el mismo denunciado, de manera que la base fáctica del procedimiento que nos ocupa quedó demostrada.
2. El *PT* **no aportó medios de convicción para demostrar la legal afiliación de ocho de las personas quejasas**, no obstante, la oportunidad procesal

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

que tuvo en diversas ocasiones, lo cual implica que sus excepciones no hayan quedado demostradas.

3. El *PT* aportó el **original** de la cédula de afiliación de Juan José Corpus García, Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia y Valeria Natali Almaguer Castillo, las cuales, al no ser objetadas por las personas citadas, pese a la oportunidad procesal para hacerlo, adquieren eficacia demostrativa para justificar su licitud, esto es, la afiliación de las personas quejasas citadas resulta constitucional y legalmente validas.
4. La objeción a la cedula de afiliación formulada por Valeria Natali Almaguer Castillo **resulta ineficaz** por no actualizar los extremos del artículo 24, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, tal como se expondrá en lo subsecuente.
5. Las **cédulas de afiliación** de Gabriela Lavalle Azamar, Daniela Rodríguez Gómez, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Adelfa Lorenzo Agustín, **resultan ineficaces** para demostrar la licitud de dichas afiliaciones, ya que, al ser exhibidas en **copia simple** y no estar adminiculada con algún otro medio de convicción integrado en los autos, no existe certidumbre respecto de su autenticidad. No resulta óbice para afirmar lo anterior su falta de objeción por las personas quejasas, tal como se verá en lo subsecuente.
6. El *PT* dio de baja a las personas quejasas el ocho de diciembre de dos mil veinte, derivado del requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora, es decir, fuera del plazo concedido por este *Consejo General*, a través del acuerdo INE/CG33/2019.

En las relatadas circunstancias, este colegiado puede arribar a la convicción de que Juan José Corpus García, Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia y Valeria Natali Almaguer Castillo, fueron libre y voluntariamente afiliadas al *PT*, mientras que las personas restantes fueron indebidamente afiliadas al denunciado, utilizando para ello, sin autorización, sus datos personales.

6. Caso concreto.

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las personas quejasas, es preciso subrayar que, de lo previsto en los artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido se replica en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas, un hecho antijurídico electoral.

Posteriormente, verificar que este hecho sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral, se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocida en la legislación de este país, la libertad de la ciudadanía de afiliarse, permanecer afiliada, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno; además del derecho que tiene la ciudadanía de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

la conservación de su Registro, identificados con el número de Resolución INE/CG617/2012, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación y, de ser necesario, acreditar que la incorporación a cada instituto político— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, no depende, del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución al denunciado, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar la responsabilidad y sanción respectiva.

Para ello, esta autoridad analizará y ponderará el caudal probatorio que obra en el expediente, a partir del cual es posible arribar al descubrimiento de la verdad de manera directa, en el caso del análisis de las pruebas plenas, o bien, de manera indirecta o circunstancial, al obtener indicios incriminatorios, entendidos estos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de otro conocido.

En este sentido, debe decirse que, en casos como el que nos ocupa, relacionados con la presunta afiliación indebida de una persona a un partido político, corresponde al quejoso demostrar la existencia del hecho en que se basa su inconformidad, es decir, la existencia de la afiliación tachada de ilegal, así como el señalamiento del denunciado, es decir, el partido político que supuestamente realizó la conducta infractora.

Al respecto, conviene destacar que, si el denunciado afirma que las persona quejasas consintieron en ser incorporada al padrón de militantes respectivo, es decir, que la afiliación objetada fue voluntaria y libre, entonces **deberá demostrar, con los elementos correspondientes, que los denunciantes efectivamente sí expresaron su voluntad para ser registradas como militantes del instituto político en cuestión.**

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "*el que afirma está obligado a probar*", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441, de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así las cosas, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que, en el caso, la carga de la prueba corresponde al partido político denunciado, pues este afirmó que la afiliación de las personas quejasas a su padrón de militantes fue voluntaria y libre, y no a dichos ciudadanos acreditar que no solicitaron su inclusión en dicho padrón, porque ello implicaría ponerles una carga desmedida sobre hechos negativos. Desde esta óptica puede afirmarse que la carga probatoria para demostrar la licitud de las afiliaciones que nos ocupan correspondía al *PT*.

A. Afiliaciones ilegales (doce personas quejasas)

En el caso que nos ocupa, como se razonó en el apartado anterior, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el mismo denunciado, que las personas quejasas se encontraban incluidas en el padrón de militantes del *PT*, esto es, los hechos consistentes en la afiliación de las citadas ciudadanas, cuya licitud se discute, han quedado plenamente demostrados.

Bajo esta óptica, demostrado el hecho debatido, corresponde verificar si la causa por la cual se alega su ilicitud se encuentra acreditada, es decir, si las personas quejasas solicitaron o no ser incluidas en el padrón de militantes del partido político justiciable, para lo cual era menester autorizar el uso de sus datos personales.

A.1 Afiliaciones respecto de las que no se presentaron pruebas

En este sentido, no obstante que el *PT* afirmó que las afiliaciones cuestionadas fueron voluntarias, lo cierto es que **no demostró con elemento de prueba alguno**, que las correspondientes a David Isabel Hernández Ortiz, Heriberto Arrieta Álvarez, Jonás David Alcalá Franco, Karina Olmos Sánchez, Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, María Felix Vanegas Bueno y Tonantzin Astudillo Méndez, fuesen resultado de la voluntad libre e individual de las personas quejasas mencionadas; esto es, no evidenció que las referidas ciudadanas y ciudadanos hayan expresado de manera inequívoca su consentimiento para ser afiliadas y menos permitir el uso de sus datos personales para el fin mencionado, a pesar de que tuvo diversas oportunidades procesales en las que **no realizó manifestación alguna** en torno a la cuestión debatida, ni ofreció medio de prueba alguno de modo que ese incumplimiento de la carga probatoria impuesta al denunciado, permite concluir a este colegiado que el *PT* no justificó que doce personas del total de las ciudadanas y ciudadanos denunciantes hubiesen consentido integrarse a sus filas.

En efecto, resulta inconcuso que, en el caso concreto, la carga de la prueba correspondía al *PT*, ya que, en esencia, sostuvo, por un lado, que sí cumplió las normas constitucionales y legales que tutelan el derecho fundamental de afiliación y, por otro, que las personas quejasas manifestaron su libre voluntad de afiliarse a dicho Instituto, asumiendo así el deber de probar dicho aserto, sin que en la especie lo haya cumplido. De esta suerte, al no estar soportados con medio de prueba alguno, los argumentos defensivos del denunciado, las excepciones opuestas resultan ineficaces.

En este sentido, tal y como quedó expuesto en apartados anteriores, la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para todo ciudadano de nuestro país, al menos desde hace varias décadas, tanto a

nivel constitucional como legal, el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e incluso, no pertenecer a ninguno.

Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas resulta igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto como garantía constitucional, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, demostrar en todo momento, que cualquier acto que implique la voluntad de un ciudadano para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a éste, deben estar amparados indefectiblemente en el documento que demuestren el consentimiento —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados— siendo ineficaz cualquier alegato en el sentido de que tal actividad rebasa la capacidad operativa y de respuesta del denunciado para cumplir con el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho.

A.2 Copias simples de cédulas de afiliación

Por otro lado, el denunciado ofreció copias simples de las cédulas de afiliación de Gabriela Lavalle Azamar, Daniela Rodríguez Gómez, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Adelfa Lorenzo Agustín; sin embargo, a pesar de que no fueron objetadas, a juicio de este colegiado resultan ineficaces para demostrar la libre voluntad de las personas quejasas, principalmente porque al ser documentales privadas ofrecidas en copia simple no existe certeza respecto de su origen y autenticidad ni se encuentran concatenadas con otros elementos de prueba que valorados en su conjunto pudieran desvirtuar la incriminación e hipótesis de culpabilidad que pesa sobre el denunciado, se explica:

Como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal, en la Jurisprudencia por contradicción de tesis **459/2011**, de rubro **DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO**

EN LOS JUICIOS MERCANTILES⁹⁹, la falta de objeción a los documentos privados ofrecidos en juicio no implica *per se*, que deban adquirir valor probatorio como documentos auténticos, ya que los documentos originales y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son simples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor probatorio; de ahí que, **las copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la falta de objeción**, como sí sucede con los documentos privados exhibidos en original.

En este sentido, las copias fotostáticas simples deben ser valoradas como simples indicios y administrarse con los demás elementos probatorios que obren en autos, según el prudente arbitrio judicial, para incrementar su eficacia.

Bajo la lógica anterior, las copias simples de las cédulas referidas no pueden adquirir la eficacia demostrativa pretendida por el *PT*, ya que no se encuentran administradas con otros medios de prueba para justificar la tesis defensiva del denunciado, toda vez que este únicamente ofreció como medio de prueba dichas documentales y frente a ellas pesa un cúmulo incriminatorio que sostiene la culpabilidad del *PT*.

En suma, a partir del material probatorio existente en autos, y de las manifestaciones de las partes, en virtud de que el denunciado no demostró que las personas quejasas, referidas en este apartado, hayan manifestado libremente su consentimiento para ser incorporada a su padrón de militantes, ni para usar sus datos personales para tal fin, esta autoridad electoral nacional concluye que las infracciones que nos ocupan quedaron **plenamente acreditadas**.

B. Afiliaciones legales.

Como se dijo al relatar los antecedentes del presente asunto, al dar contestación al emplazamiento, el *PT* afirmó que la militancia de Juan José Corpus García, Yahaira

⁹⁹ Consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002783>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Guadalupe de Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia y Valeria Natali Almaguer Castillo, estuvieron precedidas de su voluntad libre e individual, cumpliendo lo establecido en la Constitución, en las normas legales derivadas de ella y en sus ordenamientos internos, sin hacer uso indebido de sus datos personales, tal como se acreditó con el original de las cédulas que acompañó a su escrito.

Al respecto, cabe resaltar que la Unidad Técnica dio vista a las personas quejasas referidas, con copia del original de la cédula de afiliación respectiva, concediéndoles un plazo perentorio para manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto a dicho documento.

Dicho proveído fue notificado personalmente a las personas inconformes como se advierte en seguida.

No.	Persona quejosa	Manifestaciones
1	Juan José Corpus García	Ninguna
2	Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba	Ninguna
3	Yolanda Piñón Valencia	Ninguna
4	Valeria Natali Almaguer Castillo	Negó pertenecer al <i>PT</i> y desconoció haber sido afiliada al mencionado partido político

Como se advierte, las personas referidas, con excepción de Valeria Natali Almaguer Castillo, no realizaron objeción alguna para demeritar el contenido y eficacia probatoria de las cédulas de afiliación referidas, motivo por el cual esta autoridad nacional electoral estima que dichas cédulas resultan suficientes para demostrar que las personas quejasas fueron debidamente afiliadas al *PT*.

Ahora bien, respecto a la objeción realizada por Valeria Natali Almaguer Castillo, cabe señalar que las manifestaciones realizadas por la citada quejosa no demeritan en modo alguno el contenido y valor convictivo de la cédula de afiliación aportada por el denunciado, porque no controvierte ni su contenido ni su autenticidad, de modo que no existe base fáctica alguna para contrastar su valor probatorio, puesto que no ajustó su objeción a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En el mismo sentido, cabe recordar que, como se puso de manifiesto en los antecedentes de la resolución que nos ocupa, la Unidad Técnica puso los autos a la vista de las partes mediante acuerdo de veintiocho de marzo de la presente anualidad, sin que, en estas nuevas oportunidades procesales, comparecieran las citadas personas quejosa a formular conclusiones tendentes a restar eficacia probatoria a las cédulas aportada por el denunciado.

Con todo lo anterior en mente, este colegiado estima que **no se acreditaron las infracciones denunciadas en los casos bajo estudio**, puesto que el *PT*, para justificar las afirmaciones en que basó su defensa, ofreció el original de las cédulas de afiliación de Juan José Corpus García, Yahaira Guadalupe de Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia y Valeria Natali Almaguer Castillo.

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del partido político, procede ahora determinar la sanción correspondiente, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 355, párrafo 5 del *COFIPE*, cuyo contenido se reproduce en el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, relativo a la gravedad de la responsabilidad en que se incurra; el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; y, en su caso, la reincidencia y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
La infracción se cometió por una	La conducta cuestionada fue	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
acción del partido político denunciado y el grado de participación fue como autor material del hecho ilícito con pleno dominio del hecho.	la afiliación indebida y el uso no autorizado de los datos personales de las personas quejas, por parte del <i>PRI</i> .	segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), y u); 44, párrafo 2; 341, párrafo 1, inciso a), 342, párrafo 1, incisos a) y n) y 354, párrafo 1, inciso a), del <i>COFIPE</i> ; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la <i>Ley de Partidos</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas.

En el presente asunto, las disposiciones vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PT* incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a doce personas quejas de la totalidad de los denunciantes, sin demostrar que obtuvo su consentimiento para incorporarlas, vulnerando con ello lo establecido en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la Constitución; 5, párrafo 1; y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; cuyo contenido se reproduce en los artículos 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la Ley de Partidos.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el respeto de la prerrogativa señalada, a través de mecanismos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados.

Por otra parte, como se analizó, el denunciado utilizó los datos personales de las personas quejasas como lo son, el nombre y la clave de elector, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida, circunstancias que deben considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PT*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

La conducta infractora **fue singular**, pues aun cuando se acreditó que el *PT* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales, incluyendo su normativa estatutaria, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de la quejosa, tal circunstancia no implica *per se* un concierto o pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación por parte del instituto político denunciado, quien, como ya se dijo, incluyó en su padrón de militantes a las personas quejasas, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción de la conducta infractora debe valorarse las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a) Modo. En el caso bajo estudio, la irregularidad atribuida al *PT*, consistió en incluir en su padrón de afiliados a las personas quejasas, sin haber recabado su voluntad para pertenecer a las filas del instituto político citado, inobservando lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) y u) de la *Ley de Partidos*.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

b) Lugar y Tiempo. En el caso concreto, la afiliación controvertida sucedió en la fecha y lugar que se cita a continuación:

No	Nombre del quejoso	Tiempo	Lugar
1	Liliana Patricia Martínez Dionicio	05/03/2020	México
2	Manuel Antonio Cortes Velázquez	17/01/2020	Quintana Roo
3	Gabriela Lavalle Azamar	22/12/2016	Oaxaca
4	Karina Olmos Sánchez	15/03/2012	Ciudad de México
5	Jonás David Alcalá Franco	29/11/2019	Sonora
6	David Isabel Hernández Ortiz	05/12/2019	México
7	Tonantzin Astudillo Méndez	29/11/2019	Guerrero
8	Daniela Rodríguez Gómez	29/11/2019	Puebla
9	María Félix Vanegas Bueno	14/12/2011	Guerrero
10	Sureyma Concepción Velasco Trujillo	05/04/2017	Oaxaca
11	Adelfa Lorenzo Agustín	01/12/2019	Guerrero
12	Heriberto Arrieta Álvarez	02/04/2008	Guerrero

Como puede advertirse de la gráfica que antecede, las afiliaciones cuestionadas, con excepción de Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Jonás David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, Daniela Rodríguez Gómez y Adelfa Lorenzo Agustín, acontecieron, con anterioridad a la aprobación del Acuerdo INE/CG33/2019, cuya finalidad preponderante, consistía en asegurar la precisión y confiabilidad de los padrones de militantes de los partidos políticos de manera que, al no contar con la documentación soporte que demostrará la voluntad de la persona afiliada, los Partidos Políticos Nacionales debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante y, de no conseguirlo en los plazos marcados, proceder a dar de baja a los militantes respecto de quienes no contaran con la manifestación de voluntad respectiva, tal como ocurrió en la especie. Circunstancia que resulta relevante para el caso que nos ocupa y será tomada en consideración al momento de seleccionar la sanción que, en su caso, resulte aplicable.

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Este Consejo General considera que la conducta fue **dolosa**, esencialmente, por las razones que se citan enseguida:

- El *PT* es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PT* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *Ley de Partidos*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su**

configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.

Aunado a lo anterior, la conducta del *PT* resulta dolosa porque:

- Las personas quejasas negaron haber consentido su registro o incorporación como militante del *PT*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- Quedó acreditado que las personas denunciantes se encontraban inscritas en el padrón de militantes del *PT*, conforme a lo informado por el denunciado y la *DEPPP*.
- El partido político denunciado no aportó medio de prueba alguna para demostrar la legalidad de las afiliaciones de Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Karina Olmos Sánchez, Jonás David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, María Félix Vanegas Bueno y Heriberto Arrieta Álvarez, no obstante las distintas intervenciones procesales que tuvo para tal efecto.
- El *PT* aportó únicamente copia simple las cédulas de afiliación Gabriela Lavalle Azamar, Daniela Rodríguez Gómez, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Adelfa Lorenzo Agustín, las cuales resultan ineficaces para demostrar la libre voluntad de los citados ciudadanos de afiliarse al denunciado.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta pertinente precisar que la conducta desplegada por el *PT* se cometió al afiliar indebidamente a las personas quejasas, sin demostrar el acto volitivo de éstas para ingresar en su padrón de militantes, así como para proporcionar sus datos personales con ese fin.

Lo anterior independientemente que a la fecha de la resolución que nos ocupa, las personas quejasas ya no formen parte del padrón de militantes del denunciado, pues la cuestión a dilucidar consiste en determinar si las personas denunciantes

otorgaron o no su consentimiento expreso para ser afiliadas, de modo que la fecha en que hayan sido dada de baja resulta irrelevante para anular la infracción cuestionada, pues la infracción se actualizó en el momento mismo en que el denunciado las afilió indebidamente y continuó hasta que la dio de baja.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A. Reincidencia

A.1. Afiliaciones sin reincidencia

En el caso de las afiliaciones de Gabriela Lavallo Azamar, Karina Olmos Sánchez, María Félix Vanegas Bueno, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Heriberto Arrieta Álvarez, **no existe reincidencia**, puesto que, de conformidad con el artículo 458, párrafo 6 de la *LGPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

En efecto, es un hecho notorio para este órgano colegiado la existencia de diversas resoluciones emitidas por el Consejo General, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado la identificada con la clave INE/CG273/2018, por la que este Consejo General resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017, el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, determinando la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento, resolución que adquirió definitividad y firmeza, ya que no fue impugnada por el *PT*.

Con base en lo anterior, tomando en consideración que la afiliación de las personas quejasas referidas aconteció con anterioridad al dictado de la citada resolución, se estima que **no existe reincidencia**.

A.2. Afiliaciones con reincidencia

En el caso de Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Jonás David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, Daniela Rodríguez Gómez y Adelfa Lorenzo Agustín, las afiliaciones denunciadas ocurrieron con posterioridad al veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, esto es, después de la fecha en que el *PT* fue sancionado dentro del procedimiento UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017, por infracciones de igual naturaleza, además de que también fueron realizadas con posterioridad a la fecha en que se firmó el acuerdo INE/CG33/2019. En este sentido, resulta claro que la conducta que hoy se atribuye al denunciado **sí resulta reincidente**, ya que, pese haber sido sancionado por una conducta de igual naturaleza, nuevamente afilió indebidamente a las citadas personas quejas, al incorporarlas a su padrón de militantes sin su voluntad, lo cual implica una mayor transgresión a la normatividad electoral que debía observar con mayor cuidado porque ya pesaba una resolución en su contra por hechos similares.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

En efecto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Bajo este contexto, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En suma, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de las personas quejasas al *PT*, pues se comprobó que éste afilió a los citados denunciante sin demostrar que medió su voluntad para pertenecer a la lista de agremiados de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas estriba en garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, con la correlativa obligación de cada partido político, de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las personas denunciante, se dispuso indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PT*.
- No existió un beneficio por parte del denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Las personas quejasas Gabriela Lavallo Azamar, Karina Olmos Sánchez, María Félix Vanegas Bueno, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Heriberto Arrieta Álvarez, fueron dados de baja del padrón de militantes del

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

denunciado el ocho de diciembre de dos mil veinte, es decir, con posterioridad a la fecha en que debía cumplirse el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

- Existe reincidencia por parte del *PT* respecto de la afiliación de Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Jonás David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, Daniela Rodríguez Gómez y Adelfa Lorenzo Agustín

Así, en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente calificar la falta en que incurrió el *PT* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el denunciado infringió el derecho de libre afiliación de las personas quejasas, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas transgresoras a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLVI/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, en estricto acatamiento del principio de legalidad, el *INE* **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo del **PT**, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**.

Otro elemento a considerar para la imposición de la sanción es el relativo a que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General INE/CG33/2019” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el **PT**, advirtieron que a la transgresión del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyacía un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la transgresión al derecho fundamental ciudadano a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación se ordenó el establecimiento de una etapa de Consolidación de Padrones, la cual consistía de manera fundamental en que, con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte, solo figuraran como militantes de los partidos políticos, aquellas personas respecto de las que dichos institutos tuvieran constancia de su afiliación voluntaria, ello de la manera que se cita enseguida:

*Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.*

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las personas hoy quejas de su padrón de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las obligaciones a cargo de los partidos políticos podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, en el caso concreto, es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares a través de las cuales **se acreditó la infracción** materia del presente procedimiento sancionador ordinario incoado en contra del *PT*, aún a sabiendas del contenido, alcances y consecuencias de la emisión del acuerdo INE/CG33/2019 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve; tal como se advierte en el Considerando **CUARTO de esta resolución**.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al **PT** por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.¹⁰⁰ Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.”

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por el PT, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGIPE*, toda vez que dicha actitud redundaría en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

¹⁰⁰ Consultable en la página <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2014661&Clase=DetalleTesisBL>

Finalmente, resulta relevante no perder de vista que el partido denunciado eliminó a a los quejosos de su padrón de militantes **el ocho de diciembre de dos mil veinte**, es decir, con posterioridad a la fecha en que debía cumplirse el acuerdo INE/CG33/2019, de manera tal **que no le resultan aplicables** los beneficios del referido acuerdo.

Lo anterior es así, porque a la fecha en que se interpusieron las quejas que se analizan en el presente procedimiento, **había concluido la etapa de Consolidación de padrones**,¹⁰¹ de manera que, en el padrón de cada partido político —incluyendo por supuesto al denunciado—, figurasen única y exclusivamente aquellas personas respecto de quienes tuviera sustento documental suficiente para demostrar el carácter voluntario de la militancia en cuestión.

Esto es, no obstante que, en esa temporalidad el **PT** tenía pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al acuerdo INE/CG33/2019, cuyo propósito central era que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, con el objeto de contar, **únicamente, con registros de afiliación sustentados con cédulas de afiliación**, en el modo tradicional o, en su caso, con el correspondiente registro electrónico, tratándose de la aplicación móvil, **lo cierto es que dicho instituto político realizó la baja hasta ser requerido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, sin que se aprecie que se hubiere realizado una genuina revisión de los registros de militantes por dicho partido político y, en su caso, una baja espontánea.**

C.1. Afiliaciones sin reincidencia

Ahora bien, en los casos de Gabriela Lavallo Azamar, Karina Olmos Sánchez, María Félix Vanegas Bueno, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Heriberto Arrieta Álvarez, cabe destacar que las afiliaciones de mérito sucedieron antes de que el **PT** fuera sancionado mediante resolución firme por haber incorporado indebidamente a su padrón de militantes, a ciudadanos que no habían otorgado su consentimiento

¹⁰¹ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

para ello, de manera que, si bien existe la falta, el infractor no puede ser considerado reincidente.

Lo anterior, aunado al resto de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PT**, **se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo; y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral, no sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

En suma, la acreditación de la afiliación indebida de las **personas quejasas Gabriela Lavallo Azamar, Karina Olmos Sánchez, María Félix Vanegas Bueno, Sureyma Concepción Velasco Trujillo y Heriberto Arrieta Álvarez**, estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue su baja del padrón de militantes del denunciado fuera de los plazos convenidos en el acuerdo INE/CG33/2019.

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer al **PT** una multa equivalente a **963** (novecientos sesenta y tres) Unidades de Medida y

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Actualización (UMA)¹⁰², vigentes al momento de la comisión de los hechos ilegales, **por la infracción acreditada.**

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que **el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza**, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para **fijar el monto de obligaciones o sanciones.**

En esas condiciones, para los casos las afiliaciones realizadas antes de la fecha señalada, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (**963** días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por su valor en cada año señalado en el cuadro siguiente), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, a **\$96.22** (noventa y seis pesos 22/100 M.N.), resultando las siguientes cantidades:

NO	PERSONA DENUNCIANTE	AÑO DE AFILIACIÓN	MULTA IMPUESTA EN UMA'S	VALOR SMGV	VALOR UMA VIGENTE	SANCIÓN EN UMAS (A*B)/C[1]	SANCIÓN A IMPONER (C*D)
			A	B	C	D	
1	Karina Olmos Sánchez	2012	963	\$62.33	96.22	623.81	\$60,023.79
2	María Félix Vanegas Bueno	2011	963	\$59.82	96.22	598.69	\$57,606.66
3	Heriberto Arrieta Álvarez	2008	963	\$52.59	96.22	526.33	\$50,644.17
Suma de multas							\$168,274.62

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**¹⁰³

¹⁰² En lo sucesivo **UMA**.

¹⁰³ Consultable en la liga electrónica <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En el mismo tenor, por cuanto hace a Gabriela Lavalle Azamar y Sureyma Concepción Velasco Trujillo, lo procedente es imponer la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento de la comisión de la infracción, puesto que los hechos denunciados acontecieron con posterioridad a la reforma constitucional antes mencionada, conforme a lo siguiente:

N°	Afiliación indebida	Sanción impuesta en UMA'S	Fecha de afiliación	Salario mínimo	Sanción por imponer
1	Gabriela Lavalle Azamar	963	22/12/2016	\$ 73.04	\$70,337.52
4	Sureyma Concepción Velasco Trujillo	963	05/04/2017	\$ 75.49	\$72,696.87
Suma de multas					\$143,074.39

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al **PT** constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

1. Afiliaciones con reincidencia

Con base en los lineamientos expuestos, es pertinente recordar que este Consejo General mediante INE/CG273/2018, de **veintiocho de marzo de dos mil dieciocho**, resolvió el procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/IUS/CG/34/2017, determinando la responsabilidad del hoy denunciado al actualizarse la indebida afiliación que fue analizada en dicho procedimiento, resolución que adquirió definitividad y firmeza, ya que no fue impugnada por el **PT**.

No obstante lo anterior, con posterioridad al dictado de dicha resolución, el denunciado afilió indebidamente a Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Jonás David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, Daniela Rodríguez Gómez y Adelfa Lorenzo Agustín, lo cual, como ya se dijo, actualiza una conducta reincidente porque al igual que en el citado procedimiento, en la causa que nos ocupa la conducta del infractor trastocó normas de igual naturaleza consistentes en la violación al derecho de libre afiliación del ciudadano.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Bajo este contexto, resulta claro que la conducta del infractor revela un mayor desprecio por la norma, porque a pesar de que ya había sido sancionado por una infracción de la misma índole, reincidió en su conducta cuando lo debido era un mayor respeto a la norma, de ahí que la infracción que nos ocupa revele una especial atención y se justifique una mayor reprochabilidad.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Jonás David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, Daniela Rodríguez Gómez y Adelfa Lorenzo Agustín estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue:

- Que las afiliaciones indebidas fueron realizadas en los años dos mil diecinueve y dos mil veinte.
- Que se concluyó la existencia del dolo
- Que el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militante.
- Que la conducta del infractor es reincidente porque ya había sido sancionado por una conducta de igual naturaleza

Por ello, en principio, esta autoridad considera adecuado imponer una multa de **1,284** Unidades de Medida y Actualización (mil doscientas ochenta y cuatro UMA´s) vigentes al momento de la comisión de la conducta.

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia 10/2018, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN**¹⁰⁴

Cabe precisar que iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**.

¹⁰⁴ Consultable en la <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N> ligada electrónicamente

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

- **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, vigente en el año de la conducta, según corresponda, en aquellos casos en los que se acreditó la **reincidencia**.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con las claves **INE/CG168/2021 e INE/CG1675/2021**.

Así, a juicio de este Consejo General, por las razones hasta aquí expuestas, se considera que la multa impuesta al *PT*, constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, sobre todo como en el caso que nos ocupa, aquellas relacionadas con nuevos registros de militantes, que no cuenten con el respaldo que acredite la libre afiliación de las y los ciudadanos que figuran en el padrón de afiliados de un partido político

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

N°	Afiliación indebida	UMA's de multa	Fecha de afiliación	Valor UMA	Sanción por imponer
1	Liliana Patricia Martínez Dionicio	1,284	05/03/2020	\$86.88	\$111,553.92
2	Manuel Antonio Cortes Velázquez	1,284	17/01/2020	\$86.88	\$111,553.92
3	Jonás David Alcalá Franco	1,284	29/11/2019	\$84.49	\$108,485.16
4	David Isabel Hernández Ortiz	1,284	05/12/2019	\$84.49	\$108,485.16
5	Tonantzin Astudillo Méndez	1,284	29/11/2019	\$84.49	\$108,485.16
6	Daniela Rodríguez Gómez	1,284	29/11/2019	\$84.49	\$108,485.16
7	Adelfa Lorenzo Agustín	1,284	01/12/2019	\$84.49	\$108,485.16
Suma de multas					\$765,533.64

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PT* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D. El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PT*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E. Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/02997/2022, emitido por la *DEPPP*, se advierte que al *PT* le corresponde para el mes de octubre de este año, por concepto de ministración mensual para actividades ordinarias y permanentes, la cantidad de \$15'784,854.74 (quince millones setecientos ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 74/100 MN).

F. Impacto en las actividades del sujeto infractor

A consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, por la totalidad de las personas denunciantes, el porcentaje de 6.82% de sus ministraciones correspondientes al mes de octubre de la presente anualidad.

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PT* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PT* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinoso, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹⁰⁵ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el **PT**, una vez que esta resolución haya quedado firme.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación** previsto en el precepto 42 de la Ley de Medios, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. No se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y el uso de datos personales de Juan José Corpus García, Yahaira Guadalupe De Lira Ruvalcaba, Yolanda Piñón Valencia y Valeria Natali Almaguer Castillo, en términos de lo razonado en el Considerando **CUARTO** de esta resolución.

¹⁰⁵ Consultable en la liga de internet:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

SEGUNDO. Se acreditó la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales de Gabriela Lavalle Azamar, Karina Olmos Sánchez, María Félix Vanegas Bueno, Sureyma Concepción Velasco Trujillo, Heriberto Arrieta Álvarez, Liliana Patricia Martínez Dionicio, Manuel Antonio Cortes Velázquez, Jonas David Alcalá Franco, David Isabel Hernández Ortiz, Tonantzin Astudillo Méndez, Daniela Rodríguez Gómez y Adelfa Lorenzo Agustín, por las razones expuestas en el Considerando **CUARTO** de esta resolución.

TERCERO. Se impone una multa al *PT*, en los términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución, por las infracciones cometidas en contra de las personas quejas, conforme a la tabla siguiente:

No.	Persona denunciante	Sanción a imponer en UMA's	Sanción a imponer
1	Gabriela Lavalle Azamar	963	\$70,337.52
2	Karina Olmos Sánchez	623	\$60,023.79
3	María Félix Vanegas Bueno	567	\$57,606.66
4	Sureyma Concepción Velasco Trujillo	963	\$72,696.87
5	Heriberto Arrieta Álvarez	495	\$50,644.17
6	Liliana Patricia Martínez Dionicio	1,284	\$111,553.92
7	Manuel Antonio Cortes Velázquez	1,284	\$111,553.92
8	Jonás David Alcalá Franco	1,284	\$108,485.16
9	David Isabel Hernández Ortiz	1,284	\$108,485.16
10	Tonantzin Astudillo Méndez	1,284	\$108,485.16
11	Daniela Rodríguez Gómez	1,284	\$108,485.16
12	Adelfa Lorenzo Agustín	1,284	\$108,485.16
Suma de multas			\$1,076,842.65

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al Partido del Trabajo, deberá ser deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su Considerando **QUINTO**.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 42 de la Ley de Medios; así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en términos de lo establecido en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Notifíquese personalmente a las personas quejasas en el presente asunto, al *PT* por conducto de su representante ante este Consejo General de este Instituto, **en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral;** y por **estrados**, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/Q/MDLP/JD25/MEX/223/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Maestro José Martín Fernando Faz Mora.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**